

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA: ACUERDOS DE PAZ

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Los líderes sociales son cruciales para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 y para que Colombia sea más pacífica, políticamente incluyente e igualitaria.

El gobierno del presidente Iván Duque ha socavado la paz al exhibir una voluntad política limitada para avanzar en su implementación, recortando los fondos, y apoyando acciones legislativas que debilitan los aspectos centrales del acuerdo y la justicia transicional.

Específicamente, varios aspectos de los acuerdos de paz esenciales para el trabajo de los líderes sociales se han mantenido bajo presión. Es fundamental que la comunidad internacional ahora presione al gobierno colombiano para que los fortalezca.

El gobierno de Colombia puede apoyar el trabajo de raíz de los líderes sociales mediante la implementación de las siguientes disposiciones clave de los acuerdos de paz:

GARANTIZAR LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

El conflicto de más de 50 años de Colombia tuvo un alto costo humano: 220.000 muertos, más de 80.000 desaparecidos y 8 millones de personas desplazadas internamente. Se cometieron atroces masacres, miles de secuestros e infracciones al derecho internacional humanitario.

El acuerdo de paz de 2016 estableció tres mecanismos: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para descubrir la verdad detrás de estos abusos, obtener justicia para los afectados, encontrar caminos hacia la sanación nacional y la reconciliación, y garantizar la no repetición.

JUSTICIA PARA AFROCOLOMBIANOS E INDÍGENAS

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema judicial donde exguerrilleros, exparamilitares, civiles, funcionarios públicos y terceros pueden testificar sobre su papel en el conflicto, en algunos casos a cambio de sentencias reducidas.

Por ejemplo, muchos de los principales casos de la JEP buscan verdad y justicia para los abusos de derechos humanos que tomaron lugar en zonas rurales con una gran población afrocolombiana e indígena.

Por lo tanto, los casos en que el gobierno Duque ha buscado disminuir en lugar de empoderar a la JEP con el f Falta de apoyo de la administración Duque in de proteger intereses económicos y políticos especiales, representan esfuerzos evidentes para impedir justicia y bloquear las posibilidades de las víctimas de conocer la verdad sobre los crímenes cometidos y sanar. Además, esto obstaculiza los esfuerzos para garantizar que tales crímenes atroces no se repitan en el futuro.

FALTA DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN DUQUE

Algunos de los esfuerzos fallidos del gobierno de Duque para obstaculizar la promesa de justicia transicional de los acuerdos de paz incluyen:

- En marzo de 2019, el presidente intentó descarrilar la legislación crucial bajo la cual la JEP fue creada.
- También en 2019, el presidente amenazó con recortar el presupuesto de la JEP en 30 por ciento. Esto causó tanta agitación política ese año que terminó por retractarse y la JEP recibió la financiación de 82 millones de dólares que dijo que necesitaba para 2020.
- El partido político del presidente Centro Democrático intentó crear un tribunal especial dentro de la JEP que solo juzgaría a miembros del ejército.
- El presidente intentó limitar los tipos de delitos que caen bajo la jurisdicción de la JEP.
- El partido del presidente impulsó un referéndum para revocar la JEP y ha intentado desacreditar la información que ha difundido sobre las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas de Colombia.

Todos estos intentos de modificar radicalmente la JEP ignoran su importancia como herramienta para ayudar a las comunidades afrocolombianas e indígenas a buscar justicia por los crímenes de derechos humanos cometidos durante 52 años de conflicto en Colombia.

LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

La JEP no es el único mecanismo de justicia establecido por los acuerdos de paz que enfrenta una falta de apoyo político por parte de la administración Duque. La Comisión de la Verdad (CEV), que está recolectando miles de testimonios para registrar la verdad de lo sucedido durante el conflicto colombiano, recibió solo el 40 por ciento de su presupuesto solicitado en 2019, según la información disponible más reciente.

Esto restringe la capacidad de la comisión para cumplir con su misión y disminuirá los esfuerzos para documentar el desproporcionado impacto del conflicto en los pueblos indígenas y afrodescendientes. La comisión está constituida de manera tal que busca ser representativa de este enfoque: la comisión de 11 personas incluye a un hombre afrocolombiano, una mujer indígena Emberá y otro comisionado encargado de examinar las formas en que las mujeres y personas de otras identidades de género experimentaron violencia durante el conflicto.

De manera similar, a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBDP) tan solo le habría sido aprobado un tercio del presupuesto que solicitó para 2019 y en 2020 solo pudo ejecutar el 33,4 por ciento de su presupuesto. Su labor también se ha visto obstruida por la financiación burocrática y las demoras en la contratación, así como por el estallido de la pandemia de COVID-19.

Partes de este documento fueron extraídas de una publicación previa en coautoría de WOLA y sus socios, incluido el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), llamado [Proteger la paz de Colombia](#) (julio de 2020).